

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas
CAUSA ROL : C-1371-2021
CARATULADO : BECERRA/FISCO DE CHILE CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Punta Arenas, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que, en el folio 1, Pablo Andrés Bussenius Cornejo, abogado, en representación convencional de don José Bernardo Becerra Puentes, chileno, casado, jubilado, cédula nacional de identidad número N° 5.145.135-k, domiciliado para estos efectos en calle Lautaro Navarro 1066, Oficina 403, comuna y ciudad de Punta Arenas, interpone demanda ordinaria en juicio de hacienda, para la indemnización de los perjuicios por daño moral sufridos, en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado para estos efectos por el Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, don Claudio Patricio Benavides Castillo, abogado, ambos con domicilio en 21 de mayo 1678, Punta Arenas, o quien legalmente lo subrogue.

Pide al tribunal, tener por interpuesta demanda ordinaria en juicio de hacienda, de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco De Chile, ya individualizado, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar a su representado una indemnización por el daño moral sufrido, ascendente a \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) o la suma o cantidad que el tribunal estime de Justicia conceder conforme al mérito del proceso, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

Señala que cuando se produce el golpe militar, se desempeñaba en Punta Arenas como docente de aula, para el ciclo de educación básica en la Escuela Juan Williams. Era militante del Partido Socialista y Dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.

Indica que el día 4 de octubre de 1973, mientras se encontraba trabajando con sus alumnos, fue aprehendido en su sala de clases por infantes de marina, quienes fuertemente armados, delante del estupor de sus alumnos, lo llevaron de forma muy violenta y a empujones fuera



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

del establecimiento, donde había un jeep militar esperándolo, donde ya había otros colegas detenidos. Le vendaron los ojos, lo tiraron adentro y fue trasladado al Regimiento Cochrane, donde fue dejado en una carpa individual, en la que se filtraba el frío y el viento.

Relata que no entendía lo que estaba sucediendo, sólo sentía miedo e incertidumbre. Luego se enteró que, paralelamente a su detención, su domicilio había sido allanado por los marinos, quienes buscaban supuestamente armas en su domicilio, destruyendo a su paso sus muebles, para terminar llevándose sólo algunos de los libros de la biblioteca. Toda esta situación, en presencia de su esposa quien se encontraba sola con su hijo, que en ese entonces tenía 2 años. Su familia durante ese procedimiento fue amenazada e insultada con el objeto de que entregaran información sobre la existencia de las supuestas armas. Requerimiento que no tuvo la respuesta buscada, porque evidentemente ni ellos ni el actor, sabían de qué les estaban hablando. Era una situación tan violenta y absurda.

Agrega que durante sus tres primeros días de confinamiento en el regimiento COCHRANE, fue reiteradamente golpeado por conscriptos, los golpes eran propinados con fusiles, pies y manos. Lo mantuvieron de rodillas durante horas, situación que con el tiempo se tradujo en dolores permanentes que continúan hoy en día. En este lugar de detención, pudo presenciar la tortura a la que eran sometidos algunos compañeros que se encontraban en un galpón anexo, también presencié cuando eran introducidos al pozo séptico donde se acopiaban todos sus desechos, para luego ser bañados con mangueras de alta presión, desnudos y sufriendo las bajas temperaturas existentes. Mientras veía todo esto, sólo podía pensar, cuándo me tocaría a él.

Afirma que días después, fue trasladado hacia "EL PALACIO DE LA RISA", donde fue violentamente interrogado y torturado. Fue objeto de tortura mediante corriente eléctrica en lo que se conoce como "la parrilla", se le aplicó corriente en testículos y boca, quedando en pésimas condiciones. Una vez de regreso al Regimiento COCHRANE, fue trasladado a un galpón donde se encontraba el resto de los detenidos. Así pasaron los días hasta que a mediados del mes de noviembre debió ser llevado al Hospital Naval de Punta Arenas, producto de fuertes dolores estomacales. Nunca se le informó un diagnóstico.



Dice que transcurrían los días sin que tuvieran información sobre qué les sucedería o hasta cuándo seguirían allí. Su incertidumbre terminó el 22 de diciembre de 1973. Ese día fue sacado de COCHRANE para ser trasladado a ISLA DAWSON.

Menciona que lo vendaron junto a los otros detenidos y fueron subidos a un buque. Allí siguieron los maltratos, junto a la amenaza constante que serían arrojados al mar. Llegando a ISLA DAWSON, fue confinado a la barraca ALFA. Durante su detención en este centro, fue sometido a trabajos forzados y fuertes castigos físicos. Esta situación se prolongó hasta el 1 de febrero de 1974, fecha en la que fui trasladado al REGIMIENTO PUDETO. Allí fui ubicado junto a otros detenidos en un sótano en el subsuelo del regimiento, donde pululaban ratas e insectos. Luego de algunos días, el 4 de febrero, fue trasladado para un segundo interrogatorio a "LA CASA DE LA RISA", donde nuevamente fue golpeado y torturado, esta vez, recibió un golpe en la sien derecha que hasta el día de hoy lo mantiene con malestares. Un examen médico indicó posteriormente, que tiene en lugar golpeado, un hematoma en la región frontal derecha, lo que consta en cintigrama que dice se acompañará en la oportunidad procesal respectiva.

Finalmente, o eso pensaba, el día 6 de febrero fue liberado, previa firma eso sí, de un documento donde dejaba constancia que nunca recibió apremios ilegítimos. A esas alturas no tenían muchas opciones. Fue condenado y debió firmar durante 4 meses en dependencias de Carabineros.

Agrega que ilusamente como familia pensaron que toda esta pesadilla había terminado para ellos ese día, pero en mayo de 1974, fue nuevamente detenido mientras se desplazaba en la calle y fue llevado a un lugar que al día de hoy desconoce. Si bien no fue objeto de apremios físicos tan violentos durante esta última detención, si sufrió tortura psicológica. Lo mantuvieron sentado en una silla y cada persona que pasaba por su lado lo empujaba y tiraba al suelo. Sólo esperaba poder salir de allí.

Indica que cuando sucedió esto, que fue más un amedrentamiento que otra cosa, se vio obligado junto a su esposa que se encontraba embarazada, a trasladarse junto a su pequeño hijo, a la República Argentina, en la ciudad de Neuquén. Temían por su vida, ya



estaba claro que no los dejarían tranquilos. Estaba sin trabajo, había sido exonerado en marzo de ese año de su escuela y no veían esperanza en Chile para sus hijos, les estaban cerrando todas las puertas. Debieron estar alejados de su país, durante 16 años. En el autoexilio nació su tercer hijo, pudiendo retornar a Chile sólo hasta el año 1990.

Señala que las secuelas físicas de las torturas, son principalmente dolores crónicos en ambas rodillas y dolores constantes de cabeza. Psicológicamente comenzó a desarrollar tartamudez, a sudar sin control y sufrir de insomnio especialmente los primeros años luego de haber sido liberado.

Expresa que entre sus torturadores recuerda con claridad al capitán Carlos Parra en el Regimiento COCHRANE, a Juan Carlos Montino del centro de tortura de Colón N° 636 y al doctor Babaic del Hospital Naval de Punta Arenas. Puede señalar como compañeros en centros de detención donde permaneció recluido a Abramor Gonzáles, Francisco Alarcón Barrientos, Óscar Mayorga, Alfredo Corte, Julio Pedrol Kusanovic y Eleuterio Barra.

Relata que en marzo de 1974 fue expulsado de la educación pública sin derecho a apelación ni a indemnización. Este hecho gatilló la obligación de buscar una fuente de trabajo que le permitiera subsistir junto a su familia, una de las razones por las cuales optó por emigrar a Argentina. A su regreso al país en el año 1990 volvió a trabajar como profesor, sin embargo, jamás se le reconoció su antigüedad laboral ocasionando una laguna previsional de 16 años que hoy repercute en la miseria pensión que recibe. Cree que sería de justicia se le indemnizara por los años en que no pudo ejercer su profesión en Chile, su país, y que tanto le perjudicó económicamente.

Dice que revivir lo que le pasó y las consecuencias para su familia, el desarraigo, el miedo, las secuelas físicas y emocionales, ha significado reflotar muchas emociones. La falta de justicia hasta el día de hoy, para quienes sufrieron la violencia, el maltrato y la tortura y la falta de castigo para quienes les infringieron este dolor, le impulsa a contar su testimonio y buscar se le repare de alguna manera tanto daño sufrido de manera injusta a manos del Estado.



Expone que fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el D.S. N° 1040 de 2003, del Ministerio del Interior.

Que, en el folio 7, la demandada contestó la demanda.

Que, en el folio 10, la demandante evacuó la réplica.

Que, en el folio 12, la demandada evacuó la dúplica.

Que, en el folio 16, se recibió la causa a prueba.

Que, en el folio 35, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

La Constitución Política de la República. Que, como señala el profesor Carlos Nino, refiriéndose a Hart, la Constitución es posible verla como el conjunto de prácticas de reconocimiento del derecho de una sociedad –es decir, no sólo opera como un evento que se origina por una convención social, sino que representa una práctica social continua-.

Así, es posible observar a la Constitución Política de la República como un instrumento que sirve para resolver problemas de coordinación, como ocurre en el presente caso, en el cual por una parte se demanda la indemnización de perjuicios a causa de un hecho dañoso, y por otro, la existencia de la institución de prescripción –vigente en nuestro orden jurídico- lo que da certeza a sus ciudadanos –y no sólo a ellos pero a ellos principalmente- no sólo sobre la exigibilidad sino también de la oportunidad de tal exigibilidad.

Sostiene lo anterior, lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, el que mandata la incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Conviene tener presente para efectos de consideraciones previas, que el sujeto, la persona humana, se ha erigido como el centro de generación del derecho, de manera tal que son sus intereses el principal objeto de protección de parte importante de las normas jurídicas.

Como se viene reflexionando y considerando la relevancia en el proceso de construcción de normas, y específicamente de lo que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

debemos entender por derecho vigente, el Máximo Tribunal ha transitado en lo que respecta a dar lugar a la reparación civil por responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos, decidiendo de esta manera preterir la prescripción establecida para casos que no operan como éste, en el extremo, y hoy en día parece estar conteste en la necesidad de dar lugar con determinados matices.

Por su parte, el acceso a la justicia en su amplia dimensión y reparación integral a las víctimas. Ha sido, en nuestra región, la Corte IDH la que ha relevado la importancia de estos derechos, convirtiéndolo en un elemento central de nuestros ordenamientos jurídicos, ampliando su entendimiento –respecto de acceso a la justicia- no sólo a exigencias adjetivas sino a su sentido material, todo en el marco de lo que entendemos, es un Estado de Derecho.

Obliga lo anterior, que frente a la interpretación de normas, el sentenciador debe optar por aquella que haga efectivo los derechos y garantías de los ciudadanos, que efectivamente constituya un acceso a la justicia en su amplia dimensión. Así las cosas, y como lo ha señalado esta Corte internacional, “el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones...” por una parte, y por otra, pone acento en la víctima, como un actor central en el derecho internacional de los derechos humanos. Por su parte, la reparación integral comprende la investigación; restitución de derechos, bienes y libertades; la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción de la víctima; las garantías de no repetición; y las indemnizaciones compensatorias por daños materiales e inmateriales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el folio 1, Pablo Andrés Bussenius Cornejo, abogado, en representación de don José Bernardo Becerra Puentes, interpone demanda ordinaria en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado para estos efectos por el Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, don Claudio Patricio Benavides Castillo, o quien legalmente lo subrogue, por las razones de hecho y derecho señaladas en la parte expositiva, las que se dan por expresamente reproducidas por economía procesal.



Pide la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), o lo que el Tribunal determine, básicamente fundado en las violaciones a los derechos humanos del actor en distintos periodos comprendidos en la época de la última Dictadura Militar de nuestro país, a partir de 1973, especialmente enfatizando que fue expulsado de la educación pública dentro de la cual se desempeñaba, y también, reconocido como víctima por el Estado.

SEGUNDO: Que, en el folio 7, la demandada contestó la demanda solicitando se rechace la demanda.

Para efectos de demarcar la discusión, luego de revisar los escritos de estilo, conviene hacer presente que la parte demandada, esto es, el Fisco de Chile, no controvierte los hechos en lo medular, estando conteste en que estarían reconocidos por el Estado.

Así, el Fisco de Chile solicita el rechazo de la demanda, básicamente por estimar la prescripción de la acción por un lado, así como por otro, por estar en todo caso ya indemnizado en sus perjuicios la víctima, al ser parte de un programa estatal de reparación, recibiendo los beneficios que diversas leyes de reparación han establecido en su favor, como lo reconoce en la demanda, a consecuencia del reconocimiento que se les hace por la Comisión Nacional sobre prisión y tortura, creada por el D.S. N° 1040 de 2003, del Ministerio del Interior, señalando en subsidio, que el monto debe en todo caso ser muy inferior al demandado, toda vez que se explicitan los montos que el Estado ha desembolsado en diversas formas de reparación.

TERCERO: Que, en el folio 10, la parte demandante evacuó la réplica, reafirmando y reproduciendo cada uno de los conceptos, afirmaciones, planteamientos y acciones contenidas en la demanda de autos, como asimismo, las peticiones concretas deducidas en ella.

En cuanto a las excepciones interpuestas por el Fisco en su contestación de la demanda señala que el derecho internacional ha establecido el derecho a reparación integral de toda víctima, agrega que las indemnizaciones administrativa y judicial son compatibles.

Indica que contrariamente a lo sostenido por el Consejo de Defensa del Estado, la doctrina de la Corte Suprema ha asentado el carácter complementario, no excluyente de ambas indemnizaciones.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

- a. Atienden a objetivos diversos y son de distinta naturaleza.
- b. La Ley 19.992 que sólo vino a establecer un sistema de pensiones asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna.
- c. No se ha demostrado que la Ley 19.992 fuera diseñada para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados de derechos humanos.
- d. Que el Estado asuma su obligación de reparar no significa renuncia o prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de este tipo de indemnización.

Por su significancia, carácter emblemático e indudable identificación en un contexto regional, cita la Sentencia de nuestra excelentísima Corte Suprema dictada en Recurso de Casación en el Fondo con fecha 14.09.2015, en los autos Rol N° 1092-15, la que finalmente condenó al Estado de Chile a pagar la suma de 4.500 millones de pesos a 31 ex presos políticos de Isla Dawson, donde es posible encontrar las referidas argumentaciones:

“Noveno: Que estas consideraciones impiden admitir la improcedencia de la compensación invocada por el Fisco, en virtud de las pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.992, obtenidas por los demandantes, porque semejante planteamiento resulta inconciliable con la preceptiva internacional detallada y porque el derecho común interno sólo cobra fuerza cuando no la contradice, como también se señaló, en vista de lo cual la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional sobre derechos fundamentales de las personas, las que no pueden ser incumplidas en función de otras imposiciones legales de derecho patrio.

Bajo este prisma la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que fue diseñada para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación y que las asuma el Estado voluntariamente en su totalidad, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen



jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley."

Señala que en los hechos, de acogerse la presente excepción, constituiría un cierre a la revisión judicial de la reparación que podría acarrear responsabilidad internacional al Estado porque la de Corte Interamericana ha reconocido el derecho de las víctimas de acceder a la justicia para solicitar una declaración judicial de responsabilidad estatal para que se efectúe una determinación individual o cuestionar la suficiencia o efectividad de las reparaciones percibidas con anterioridad.

"13.- Que efectivamente tal como se señala el demandado al contestar la demanda se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en la situación como la del demandante. Dichas reparaciones han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido sujeto a apremios ilegítimos en dicho periodo. Sin perjuicio que tal como lo señalara la demandada, el monto global atendida la cantidad de personas en dicha situación en nuestro país alcanza una suma importante de dinero para el Estado Chileno, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que obliga al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, esto es, a cada persona en específico (...)"(Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 07.01.13, dictada en los autos Rol N° 803-2008).

Agrega que resulta contrario a todo concepto de justicia que sea el responsable del daño, el Estado y sus agentes, el que fije la cuantía de la reparación, esa es la pretensión oculta tras esta excepción.

Explica que razonando desde las reglas del derecho civil, diversos fallos de nuestros tribunales superiores de justicia han concluido que, tratándose de medidas de reparación por violaciones a los derechos humanos, éstas no se condicen con el diseño normativo y presupuestos legales del derecho privado, particularmente, los relativos al pago:

"Décimo: (...) A consecuencia de lo reseñado es que es posible aseverar, como lo hace el profesor Fueryo Laneri, que el primer requisito



del pago es la preexistencia de una obligación, pues de no existir ésta se cae en la figura del pago de lo no debido (Fueyo Laneri, Fernando, Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones, 2ª ed., p. 59).

Undécimo: Que el proceso de autos tiene justamente por objeto que se declare la existencia de la obligación de resarcir el daño moral que han sufrido los demandantes, de lo que se deriva la improcedencia de la excepción planteada por el Fisco de Chile, razón por lo que cuando los sentenciadores del grado expresan que “sin que preexista una obligación de objeto determinado llamada a extinguirse, no ha podido verificarse el pago de lo que se adeuda, sin que pueda atribuirse por analogía esa naturaleza jurídica a las acciones reparatoria emprendidas por el Estado de Chile”, no incurren en el error de derecho que se denuncia en el libelo en análisis, desestimándose de esta forma el capítulo primero del recurso”. (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 28.04.2015, dictada en los autos Rol N° 23.441-14).

En cuanto a la existencia de reconocimientos por parte del Estado de Chile que la reparación integral de las víctimas es un tema todavía pendiente en nuestro país, sobre el punto, y por su completo desarrollo, cita el fallo de nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, dictado con fecha 25.03.2020, en los autos Rol 180-2019.

Respecto a la excepción de prescripción extintiva, afirma que las normas del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad.

Indica que son 2 las premisas presentes en la argumentación del Consejo de Defensa del Estado: 1) Que las acciones reparatorias, como la intentada en autos, pertenecen al ámbito patrimonial, encontrándose por tanto regidas por el Derecho Civil. 2) Que en el derecho civil se encuentra el estatuto general de responsabilidad. Sin embargo, ambas premisas se encuentran actualmente superadas. En efecto, en el estado actual del debate, no existe mayor discusión, a nivel doctrinario ni jurisprudencial, en cuanto a que las acciones reparatorias, por su especial ámbito, tienen una naturaleza internacional o humanitaria, no patrimonial y que esta clase de delitos se sujeta a un régimen autónomo de responsabilidad estatal.



Agrega que incluso es posible encontrar diversos fallos en que nuestra excelentísima Corte Suprema se ha manifestado explícitamente contraria a la aplicación del Código Civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad, argumentando para ello desde la especificidad propia de la materia, citando la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 06.01.2014, dictada en los autos Rol N° 2918-2013; Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 16.06.20, dictada en los autos Rol N° 34.111-19.

Afirma que los delitos de lesa Humanidad se sujetan a un régimen autónomo de responsabilidad estatal, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, como es el caso sub lite, la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, no surge del derecho civil, sino de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público, esto último posibilitado por la remisión que hace el artículo 5 de la Constitución Política de la República.

Así como de la utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional.

Menciona el régimen autónomo de responsabilidad estatal que desde el año 2015, ha venido siendo reconocido consistentemente por la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, entre otros, en Sentencia de Casación en el Fondo de fecha 23.01.2018, dictada en los autos Rol N° 31.711-17.

Señala que de la existencia de este régimen autónomo de responsabilidad estatal se siguen determinadas consecuencias: una de ellas es que la responsabilidad del Estado que surge por violaciones a los derechos humanos no se extingue por el transcurso del tiempo.

Dice que la responsabilidad, tanto civil como penal derivada de la comisión de crímenes contra la humanidad, se sujeta a un mismo



estatuto de imprescriptibilidad integral, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que postula que todo daño acaecido en el ámbito de estos derechos, ha de ser siempre reparado integralmente, con arreglo a las normas de derecho internacional convencional, o en su defecto, del derecho consuetudinario, de los principios generales o aún de la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción internacional.

Tanto el sistema universal como el interamericano reconocen este derecho a la reparación integral.

En relación con lo anterior, hace mención de los desarrollos existentes en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.

En consecuencia, hoy no queda duda alguna que a la luz del Derecho Internacional General, las acciones indemnizatorias son imprescriptibles.

Agrega que en el ámbito interamericano, cabe destacar lo estatuido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente, en su artículo 63, donde se establece uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados, puesto que cuando ha existido violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar la acción con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Luego, la prescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad infringe los artículos 26, 27 y 53 de la Convención de Viena, esta última disposición en relación a las reglas imperativas de derecho internacional o "IUS COGENS".

En efecto, infringe el principio internacional de que los tratados deben cumplirse de buena fe, contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena; el principio de derecho internacional contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena, el que previene que los Estados no pueden invocar su derecho interno -para eludir sus obligaciones internacionales- en la especie, la de establecer responsabilidades-, que es justamente la hipótesis en que se pretende la aplicación de las reglas de prescripción contenidas en el Libro Tercero



título XXXV del Código Civil, evitando de esta forma al Estado de Chile cumplir la obligación reparar una violación grave del derecho internacional, tratándose de delitos de lesa humanidad. Dejaría de aplicar el artículo 53 de la Convención de Viena, el cual incorpora al derecho convencional las reglas imperativas de derecho internacional o "IUS COGENS": *"es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general"*.

Agrega que la excepción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, representante del Fisco de Chile, contradice abiertamente el expreso reconocimiento de su responsabilidad internacional efectuado por el Estado Chileno durante la tramitación del CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE seguido ante CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH).

Señala que mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS condenó al Estado chileno como responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, ello como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

Afirma que no corresponde acceder a lo solicitado, atendido lo ya expuesto, en orden a que la indemnización civil y la administrativa son compatibles, no excluyentes. Asimismo, y en la etapa procesal correspondiente, dice que justificará la justicia del monto solicitado.

CUARTO: Que, en el folio 12, la parte demandada evacuó la dúplica, señalando al efecto que reproduce íntegramente y ratifica en su totalidad el escrito de contestación de la demanda por lo que se reiteran todas y cada una de las alegaciones, excepciones y defensas contenidas en dicho escrito.

En relación a la prescripción de la acción deducida en este juicio, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excm. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 "Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno" y que la defensa transcribió en sus principales argumentos, en el escrito de contestación a la demanda.



Menciona que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código 22 Civil.

Dice que en efecto, desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican "a favor y en contra del Estado".

También la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia, cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, donde, pronunciándose respecto a la excepción de pago y de prescripción.

Finalmente, hace presente que el demandante ha recibido la suma total de \$40.645.659.- y que mantiene, además, una pensión mensual de \$184.111.

Así las cosas, reitera lo ya indicado en su contestación, rechazando las argumentaciones de la actora realizadas en su escrito de réplica.

QUINTO: Que para acreditar su acción la demandante rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 23, acompañó: 1) Informe de Daño a consecuencia de Prisión Política, Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES, emitido por Alejandro Darío Valle Soto, Psicólogo, Programa PRAIS Magallanes; 2) Certificado del Jefe Regional Instituto Nacional de Derechos Humanos Magallanes y Antártica Chilena, que acredita que



don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Adjunta nómina donde figura. Fecha de emisión: 17 de marzo de 2022; 3) Resolución N° 05048, del Coordinador Nacional Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, que declara la calidad de exonerado político y concede beneficio que indica a don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES. Fecha de emisión: 18 de abril de 2001; 4) Oficio N° 1122, del Director Provincial de Educación Primaria Magallanes, que transcribe Resolución N° 5393 del 28 de marzo de 1974 que pone término nombramiento de don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES. Fecha de emisión: 16 de mayo de 1974; 5) Oficio N° 1197, de la Directora Provincial de Educación Primaria Magallanes, que transcribe Resolución N° 8652 del 24 de abril de 1974 que crea plaza designa personal y reconoce deuda. Fecha de emisión: 23 de mayo de 1974; 6) Certificado N° 11.279, del Director Oficina Nacional de Retorno, que acredita la calidad de exiliado político de don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES. Fecha de emisión: 27 de octubre de 1993; 7) Certificado del Doctor Daniel Bancalari Diaz del Centro de Atención Ambulatoria de Alta Complejidad del Hospital Las Higueras, que acredita la condición de paciente de don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES. Fecha de emisión: 27 de febrero de 2020; 8) Certificado Doctor Gonzalo Peña Arenas del Centro de Atención Ambulatoria de Alta Complejidad del Hospital Las Higueras, que acredita que don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES fue diagnosticado de cáncer de próstata. Fecha de emisión: 16 de enero de 2020; 9) Certificado Doctor Rodrigo Gómez Sáenz del Policlínico Cardiología del Hospital Las Higueras, que acredita la condición de paciente de don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES. Fecha de emisión: Enero de 2020; 10) Resultados Cintigrama Óseo con Tc-99-MDo efectuado a don JOSÉ BERNARDO BECERRA PUENTES. Fecha de emisión: 20 de junio de 2014; 11) Tapa y páginas 1 a 13 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes a prólogo e índice del mismo. Fecha de emisión: 28 de noviembre 2004; 12) Páginas 225 a 250 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes al Capítulo V- Métodos de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

Tortura: Definiciones y Testimonios. Fecha de emisión: 28 de noviembre 2004; 13) Páginas 467 a 513 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes al Capítulo VIII- Consecuencias de la Prisión Política y Tortura, Sección: Las consecuencias en las Víctimas. Fecha de emisión: 28 de noviembre 2004; 14) Tapa y páginas 539 a 543 de la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I)". Fecha de emisión: 28 de noviembre 2004; 15) "Informe acerca del daño psicológico y emocional en familiares de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar", elaborado por Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), de fecha agosto de 2016. Fecha de emisión: Agosto de 2016; 16) "Informe en Términos Generales sobre las secuelas dejadas en el Plano de Salud Mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la Dictadura Militar", elaborado por la Psicóloga del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Norte, de fecha 23 de septiembre de 2016. Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2016; 17) Tapa y páginas 30 a 50 de la "Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el estado en el periodo 1973-1990", del Ministerio de Salud; 18) Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 372. Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2018; 19) Sentencia dictada en los autos Rol C-682-2016, caratulados PROVOSTE / FISCO DE CHILE, seguidos ante este Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas. Fecha de emisión: 30 de noviembre de 2017; 20) Sentencia dictada en los autos Rol C-1320-2018, caratulados CÁRCAMO/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, seguidos ante este Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas. Fecha de emisión: 18 de junio de 2019; 21) Sentencia dictada en los autos Rol C-499-2017, caratulados GUELET/FISCO DE CHILE, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas. Fecha de emisión: 26 de agosto de 2019; 22) Sentencia dictada en los autos Rol C-803-2008, caratulados VALENCIA OYARZO ELI/FISCO DE CHILE, seguidos ante 18º Juzgado Civil de Santiago. Fecha de emisión: 07 de enero de 2013; 23)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

Sentencia dictada en los autos Rol C-1548-2020, caratulados ALVARADO/FISCO DE CHILE /CDE, seguidos el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas. Fecha de emisión: 06 de mayo de 2022; 24) Sentencia de nuestra excelentísima Corte Suprema dictada en los autos Rol 1092-15, caratulados VALENCIA OYARZO ELI/FISCO DE CHILE. Fecha de emisión: 14 de septiembre de 2015; 25) Fallo de nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictado en los autos Rol IC 129-2020 Civil, caratulados MASCAREÑA/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO/FISCO DE CHILE. Fecha de emisión: 13 de octubre de 2020.

Testimonial: Que, en el folio 33, rindió la de don **Baldovino Erasmo Gómez Alba**, quien señala que es efectivo que don José Bernardo Becerra Puentes, sufrió privaciones de libertad, tortura y abusos por parte de agentes del Estado de Chile, porque cuando se encontró con José Becerra en Dawson en Diciembre de 1973 y los primeros meses de 1974, lo conoció porque se lo presentó Santiago Oyarzun, que es profesor, igual trabajaba en una escuela y José era profesor en la Escuela Juan Williams de Punta Arenas y ahí se enteraron del tormento que tuvo que pasar igual que todos los presos políticos, fue detenido en la misma escuela y permaneció en un galpón del Regimiento Cochranne, este recinto era uno de los peores, de los que conocieron, el sufrimiento y tortura era diaria, porque lo sufría uno y porque todos los días era con distintas personas, en el lugar y en la casa de Colón N° 636. Ese galpón no tenía ninguna condición, no tenía agua, baño, ni menos calefacción, las necesidades había que hacerlas afuera en una cuneta, con militares apuntando, todo era humillación y menoscabo. Indica que conoció el galpón del Cochranne a fines de mayo de 1974, estuvo como 3 o 4 días detenido ahí y se mantenía en las mismas condiciones. El Capitán Parra se destacaba por su crueldad quien era el jefe de ese sector donde los tenían prisioneros. Menciona que la primera detención de don José Becerra tiene que haber sido en octubre de 1973.

Describe que la vida en Isla Dawson durante el periodo que señala haber compartido con don José Becerra era dura, era un campo de concentración, había para los presos Magallánicos 4 barracas Alfa, Bravo, Charlie y Remo, en cada una habían como 90 personas, don Carlos Zanzi era el N° C-96, a cada uno se los despojó del nombre y se les asignó una letra y un número, los campos estaban



alambrados y las barracas también con alambre de púas, la jornada era de trabajo forzado y de castigo durante todo el día, sin ropa adecuada y sin una alimentación suficiente, incomunicados de la familia, obligados a marchar y a cantar los himnos de ellos, había permanente castigo a través del aporreo, no había atención de salud y cuando había algún problema de salud, tenía que atenderlo un médico que estaba detenido en la barraca Isla, en donde estaban los detenidos de Santiago.

Expresa que después de salir de Isla Dawson, en ese tiempo supo que don José Becerra había sido detenido de nuevo y no pudo volver a su trabajo de profesor, él era casado y tenía un hijo pequeño, era muy complicada su situación, trabajó en lo que pudo y se fue a vivir con su familia a Argentina, y señala que cuando lo detuvieron nuevamente lo llevaron al Cochranne, y volvió del exilio en el año 1990 y fue reincorporado a su trabajo en la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Indica que es efectivo que el actor sufrió daño moral a consecuencia de los hechos relatados, el daño causado por la tortura y prisión política es irreparable y permanente, nunca hubo apoyo de salud de parte del Estado para de alguna manera sobrellevar esta situación, de hecho un daño que ha mantenido Becerra y todos los que han salido al exilio en ese tiempo, son las lagunas previsionales; consultado si tiene conocimiento de algún daño, material, laboral y familiar el demandado dice que principalmente el tema de salud, el no poder de alguna manera reparar el daño de la tortura, la falta de concentración, el des arraigo de la familia, salir de Chile y después volver a insertarse a un país que había cambiado.

Que, en el mismo folio rindió la de don **Alejandro Lorenzo Olate Lavet**, quien indica que es efectivo que don José Bernardo Becerra Puentes, sufrió privaciones de libertad, tortura y abusos por parte de agentes del Estado de Chile, por ser colega de su padre en esa época sabían perfectamente cuando eran detenidas personas que conocía, profesores, vecinos, amigos, amigas, estudiantes. Aclara que personalmente sufrió el mismo trato vejatorio de secuestro, tortura y privación de libertad. Dice que vio personalmente en las instalaciones del campo de concentración de Isla Dawson, cuando los hacían formar



en el patio grande del campamento, a pesar de que estaban separados en distintas barracas, podían identificar al resto de los compañeros que estaban, tanto en la barraca alta Charlie y Bravo, estando él en la Barraca Remo. Agrega que también puede dar fe con respecto a eso, que todos los detenidos, detenidas, estudiantes, menores de edad y adultos mayores fueron tratados de la misma manera, con torturas, golpes, aplicación de corriente y todo tipo de vejámenes. Indica que coincidió con don José Becerra en la Isla Dawson aproximadamente en la segunda semana de enero de 1974, fue cuando llegó el grupo del primer consejo de guerra, en el cual el testigo estaba incluido, a tomar ubicación en la barraca Remo. Describe que las condiciones en las que estaban en la barraca, para 80 prisioneros y solo consistía en literas dobles de madera y una construcción muy básica de armazón de madera y forrada con fierros acanalados, se contaba con dos calentadores grandes a leña, uno estaba a la entrada de la barraca, en la mitad de la barra y otro muy cercano a los baños ubicados en un extremo izquierdo de la barraca. Menciona que su trabajo diario consistía en salir del campamento un grupo de no más de 10 prisioneros, se dirigían a los carros, a una distancia de 500 a 600 metros del campamento, donde procedíamos a trabajar en cuadrillas de hacheros los que cortaban el tronco de los árboles grandes en trozos de aproximadamente 2 metros, otro grupo con cuñas y combos, partían los troncos y posteriormente eran cargados, cada uno de ellos cargados con un tronco para llevarlos a la barraca. En la barraca habían compañeros que por su estado de salud física y mentalmente no podían hacer un trabajo tan pesado como ese, pero les asignaron el trabajo de cortar los troncos y hacer astillas para ir llenado sistemáticamente una leñera que estaba a continuación de la barraca aproximadamente de unos 4 metros de largo por 3 de ancho y debe haber tenido 1 metro 80 a dos metros de altura, ese trabajo era de manera diaria independiente del clima. Las condiciones normales en que trabajaban era esa, no había una atención de salud permanente, en realidad se cuidaban entre ellos. Agrega que en el consejo de guerra de 1973 y posteriormente la segunda semana de enero llegaron a Isla Dawson a la barraca Remo, explica que quienes llegan son el testigo, Eliecer Valencia, Luis Valencia, Hernán Biott, Paulo Jeria, Luis



Alvarado, Alfredo Corte, Aldo Mayor, entre otros 3 compañeros que no recuerda el nombre, y que cuando llegaron ya se encontraba en Isla Dawson don José Becerra, se dio cuenta cuando los reunieron en el patio de formación, distinguiendo al profesor Becerra en el grupo de la barraca Alfa; indica que don José Becerra permaneció en Isla Dawson aproximadamente 2 meses; Señala que don José Becerra estuvo detenido anteriormente a Isla Dawson, que fue detenido aproximadamente la primera semana de octubre de 1973 y que estuvo en el Regimiento Cochrane.

Indica el testigo que sí estuvo detenido en el Regimiento Cochrane, era un recinto donde inicialmente se guardaban carros de combate, que fue habilitado de manera artesanal con literas y con una capacidad aproximada de 40 a 50 detenidos o prisioneros, no contaban con instalaciones sanitarias y su duchas diarias se hacían frente a ese galpón donde había un grifo, que aún existe, en donde sacaban la tapa del grifo y eran obligados a pasar por el chorro de agua fría, una vez al día. Dice que también fueron interrogados permanentemente, en base a torturas psicológicas y físicas, una de ellas era sacar a 2 o 3 prisioneros los cuales eran llevados a la parte de atrás de las instalaciones, donde había una cancha de fútbol, les hacían preguntas con respecto a si tenían armas, o alguna condición especial de defensa personal, o si formaban parte de algún grupo subversivo, al no encontrar una respuesta satisfactoria para ellos, los ubicaban en el área grande de la cancha de fútbol en el arco más cercano, ellos al interior del arco, cuatro de ellos cada uno con un perro amaestrado policial y les daban la orden de correr hacia el otro extremo de la cancha, donde detrás del arco contrario había un cerco natural de matas de calafate, a la orden de correr, corrían al llegar a la mitad de la cancha, soltaban los perros, al llegar al final tenían 2 opciones, o dejar que los perros los mordieran o saltar encima de las matas de calafate, llevándonos posteriormente a la enfermería para sacarles las espinas o curarles las mordeduras.

Dice que don José Becerra si pasó por el Centro de tortura denominado Casa de la risa, esto le consta porque posteriormente conversando con varios compañeros era el paso obligado de todo



aquel que era detenido para ser interrogado y muchos de fueron más de 2 o 3 veces al lugar.

Señala que don José, con posterioridad de haber estado en la Isla Dawson, fue dejado en libertad, pero fue detenido nuevamente e interrogado, de la misma manera que la primera vez, sin resultado a lo que ya había dicho anteriormente. Supo posteriormente a eso, que había dejado la ciudad con la familia y se había radicado en una ciudad Argentina. El retorna con los años cree que en 1990 podría ser aproximadamente; desconoce el lugar de la última detención de don José Becerra.

Indica que es efectivo que el actor sufrió daño moral a consecuencia de los hecho relatados, dice que tiene que ser muy objetivo en esta respuesta, porque los que vivieron en ese periodo, a pesar de la diferencia de edades, los menores tenían entre los 16 y 18 años, conversaban mucho con los mayores, en especial con los profesores, algunos de ellos recién formando una familia, casados con 1 o 2 hijos pequeños, se encontraban en una situación muy difícil y compleja, primero por estar privados de libertad, segundo por no saber de sus familias y sus hijos pequeños, siendo ellos el único sostén económico de su hogar, es el caso de don José Becerra, casado con un hijo de 2 años y la incertidumbre de no saber en qué condiciones estaba su familia, su casa fue allanada en dos oportunidades, mientras él estaba detenido, ese es uno de los tantos daños psicológicos, más que físicos los que sufrieron sus compañeros y compañeras en detención. Menciona que don José Becerra en ese instante de su detención era profesor primario y ejercía en la Escuela Juan Williams. Después que volvió no pudo ejercer su profesión en esa Escuela ni en ninguna otra de la Región, prácticamente fue obligado a salir del país

SEXTO: Que, por su parte, la demandante rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 25, acompañó: Oficio DSGT N°4792-4114 del Instituto de Previsión Social, de fecha 16 de noviembre de 2021.

DECISION:

SEPTIMO: Que, de la prueba instrumental, no objetada y detallada en los considerandos precedentes, resulta posible constituir indicios graves, precisos y concordantes entre sí, en los términos de los artículos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

1712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento del ramo, para construir, mediante un proceso lógico deductivo, una presunción judicial con mérito probatorio suficiente para los efectos de establecer como hechos de la causa los siguientes:

Que, efectivamente José Bernardo Becerra Puentes, fue sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo constitutivo de un ilícito, para lo que nos convoca, de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal, los cuales fueron perpetrados al menos y concretamente, en la ciudad de Punta Arenas, particularmente en el Regimiento Cochrane, y posteriormente en Isla Dawson, desde el 2 de octubre 1973 al 6 de febrero de 1974, sufriendo en un principio la pérdida de su trabajo como profesor en la Escuela N°12 de Magallanes, luego una privación de libertad, interrogatorios, golpes y trabajos forzados, así como el alejamiento, en tal contexto de su familia, durante este periodo de tiempo. Posteriormente, se ha dado cuenta de su traslado de ciudad, fuera del país, en compañía de su familia, con destino a Argentina, particularmente a la ciudad de Neuquén.

Que don José Bernardo Becerra Puentes se encuentra dentro de la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura de la Comisión Valech I, bajo el número 2967.

OCTAVO: Que en relación a la existencia del daño, y sin perjuicio de lo ya referido en el considerando anterior, el mismo se desprende de la naturaleza de la agresión de la cual padeció, en manos de agentes del Estado, desde su privación de libertad, golpes, malos tratos e interrogatorios, con uso desmedido de la fuerza, y prácticas fuera del derecho, hasta la consecuencia directa que implicó la separación de su familia y su traslado a Argentina, y debiendo considerarse en este sentido su reconocimiento por parte del Estado como víctima, así como las reparaciones que, si bien no permiten ser entendidas como íntegras, sí complementan el ejercicio de la acción que se pretende en estos autos, al morigerar las consecuencias perniciosas del ilícito, al estar fundada en los mismos hechos cuyas afectaciones incidieron en el ámbito personal, familiar, laboral y socio político.

NOVENO: Que, cabe señalar que los documentos incorporados al proceso dan cuenta de lo ya establecido, y los testigos han permitido



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

contextualizar el desarrollo de los acontecimientos y los detalles de los momentos vividos en cada uno de los centros de detención, principalmente, además las sutilezas que dan la especial particularidad de esta causa, y de las fortalezas que el actor desarrolló para afrontar todo el proceso de desarraigo y reelaboración.

DECIMO: En efecto, tal como lo afirma el demandado, se han efectuado por el Estado chileno múltiples esfuerzos, una vez finalizado el régimen autoritario, de compensación a todos aquellos víctimas de violaciones de derechos humanos o a sus familiares directos por episodios ocurridos durante el período de la Dictadura Militar que gobernó nuestro país, que ha sido fijado por ley entre los años 1973 y 1990.

Amparados bajo esta lógica, es que se dictó la Ley N° 19.123, de 8 de febrero de 1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que establece una pensión mensual de reparación, en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

Normativa a la que se agregó la Ley 19.234 de 1993, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para transigir extrajudicialmente con relación a la jubilación de éstos en los casos que señala; la que dispuso en su artículo 8 en relación con su artículo 3, que son exonerados políticos los que hayan sido despedidos por causas que se hubieran motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como el hecho de figuración del exonerado en decretos, bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por alguna autoridad civil o militar, como activista político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso, que hubieran sido privados de libertad, en cualquier forma, fuere en calidad de prisioneros, retenidos, detenidos, relegados o presos, en cárceles, prisiones, regimientos, lugares especialmente habilitados al efecto, o en



su propio domicilio, sea que estos resulten ser coetáneos, o inmediatamente anteriores o posteriores a la exoneración, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta fue modificada por la Ley 19.582 y la Ley 19.881 estableció un plazo para acogerse a los beneficios allí concebidos.

Asimismo, en el marco del reconocimiento de violaciones de derechos humanos en Chile por parte de agentes del Estado durante la Dictadura Militar, se dictó la Ley 19.980 de noviembre de 2004, ampliando los beneficiarios y beneficios de leyes precedentes; y la Ley 19.992 de diciembre de 2004, que estableció beneficios de carácter médico y educacional y una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, así como su incompatibilidad con aquellas otorgadas en las leyes N° 19.234, 19.582 y 19.881, otorgando a estas personas la opción y a quienes la ejerzan el derecho a un bono. La ley 20.134 que concedió un bono extraordinario a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado, exonerados por motivos políticos en período que indica a quienes se les concedió pensión no contributiva conforme al inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234.

Tal normativa interna tiene prístina vinculación con lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en que los Estados Americanos signatarios, entre otros, reconocen un listado de derechos que estiman consubstanciales a la persona humana. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en Chile desde el año 1989.

Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas leyes de reparación; si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de derechos humanos o



a sus familiares directos, estima este sentenciador que en modo alguno impide acceder ni es incompatible, con el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil ofensiva, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta, instando por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

En efecto, la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que, conforme al análisis de las características de los beneficios que involucran sólo introduce un régimen de reparaciones asistenciales generales, no contiene en sus textos incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, y no es procedente suponer que se dictaron para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dijo, de formas distintas de reparación, y el que las asuma el Estado voluntariamente en su totalidad, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley.

En cuanto a la tesis sostenida en la defensa fiscal, respecto el plan de reparación estatal que implica la necesidad de rechazar in limine la demandas que las víctimas puedan ejercer ante tribunales, no resultan suficientes, pues de acoger a tramitación las mismas no desincentiva los planes estatales, toda vez que es precisamente la legitimidad del control judicial la que permite resguardar los derechos fundamentales, de nuevo vinculado al acceso a la justicia en su amplia dimensión, así como controlar la integridad de las reparaciones y reafirma los derechos fundamentales como límite o barrera frente a lo que alguna vez –y particularmente en 1973- pudo construir un fin estatal.

En este orden de cosas, si bien no se puede tener las indemnizaciones otorgadas por ley al demandante como suficientes para una excepción de indemnización satisfactiva, lo cierto es que consta en la ya pre-citada Ley, las prestaciones a las que se dio acceso, las que en términos generales pueden constituir una buena señal en cuanto a que nuestro Estado pretende por tal vía reparar en parte el mal causado, y por otra, ofrecer garantías de no repetición, pero que indudablemente no alcanzan a dar por cumplida la obligación del Estado de reparación integral a la víctimas, reparación que por cierto



fluye como simbólica y más aún, compatible pues el plan del vida del actor ya se ha transformado y sólo corresponde en esta instancia, la estimación de un monto que pueda considerarse como necesario para alcanzar los objetivos que pueda lograr una indemnización por daño moral, y de esta manera, las mismas serán consideradas para efectos de la regulación como se indicará.

DECIMO PRIMERO: Que, en relación a la excepción subsidiaria de prescripción, como ya se indicó en las consideraciones previas de esta sentencia, se reproducen los argumentos esgrimidos y se remite a ellos, sin perjuicio de enfatizar que no resulta aplicable esta institución de carácter civil, para efectos de denegar el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas de derechos humanos, es decir, a las víctima como los que se han establecido en esta sentencia, y que han sido perpetrados por agentes del Estado, de manera sistemática y fuera del derecho, conforme lo ha ya resuelto la doctrina, pero especialmente los Tribunales Superiores de Justicia, así como la CortelDH, institución que cede ante las normas de ius cogens, normas de derecho internacional que mandatan al estado a responder como parte del principio democrático de derecho.

En efecto, en similares casos atendida la especial naturaleza del ilícito cometido, el Máximo Tribunal ha venido sustentando una línea de razonamiento que este sentenciador comparte (roles 1424-2013, 11208-2015, 13170-2015, 17015-2015, 37993-2015), la cual enfatiza que tratándose de un delito de lesa humanidad en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no parece coherente entender que la acción civil indemnizatoria quede sujeta a las normas sobre prescripción consagradas en la ley civil interna, ya que ello contraría la preceptiva internacional sobre Derechos Humanos integrante del ordenamiento jurídico nacional en virtud del artículo 5° de la Carta Fundamental, que introduce el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos como consecuencia del acto ilícito, y se opone incluso a lo establecido por el propio derecho interno que en virtud de la Ley n°19.123, reconoció la existencia de los daños y concedió beneficios de índole pecuniario también a los familiares de aquellas víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los



derechos humanos en el período 1973-1990, registrados en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Por consiguiente -se afirma- cualquier supuesta diferenciación entre ambas acciones y otorgamiento de un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Estriba lo anterior, la improcedencia de aplicar normas del Código Civil como derecho común supletorio a la responsabilidad derivada de crímenes como el de autos, posible de cometer con la activa colaboración del Estado, por cuanto dichas normas atienden a postulados y finalidades distintas a aquellas que emanan del Derecho Internacional, de manera que deberá integrarse la normativa con los principios generales del derecho respectivo, que reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos.

DECIMO SEGUNDO: A mayor abundamiento, conviene tener presente que la acción deducida encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile que consagran el derecho a la reparación íntegra, los que el Estado está obligado a reconocer y proteger con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5° inciso segundo y 6° de la Carta Fundamental.

En esta línea argumentativa, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1.1 y 63.1) sujeta la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos (violaciones de derechos humanos) a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, acatando de este modo la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (artículo 27). Esta preceptiva de rango superior impone un límite y un deber de actuación a los poderes públicos y en especial a los tribunales nacionales, en tanto no pueden interpretar las reglas de derecho interno de un modo tal que deje sin aplicación los preceptos de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación



íntegra del daño, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Conforme se viene razonando, no resultan atinentes las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios que contradicen la normativa internacional en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado de Chile.

DECIMO TERCERO: Finalmente debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también del artículo 6° de la Constitución Política de la República y 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, normas que -de acogerse la tesis del Fisco de Chile- quedarían sin aplicación.

La primera disposición, somete la acción de los órganos del Estado a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, declara la fuerza vinculante de los preceptos de la Constitución para sus titulares o integrantes como para toda persona, institución o grupo, y dispone que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. La segunda, establece que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad.

DECIMO CUARTO: Atendido lo anterior, en lo precedente, corresponde rechazar la excepción de prescripción de las acciones civiles que se ejercitan en autos por aplicación de la preceptiva contenida en el Código Civil, por ser contrario a las reglas de Derecho Internacional a que queda sujeta la responsabilidad del Estado por la clase de ilícitos que se analiza.

DECIMO QUINTO: Que, en virtud de la presunción judicial establecida en el considerando séptimo de esta sentencia y en base a la prueba documental aportada y no objetada por la contraparte, quedaron asentados en el caso sub júdice los hechos que dieron origen al daño moral reclamado por la demandante.



Por otra parte, en torno a los daños emocionales y psicológicos sufridos corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1698 de Código Civil y a las reglas de la prueba legal o tasada.

Que, conforme la interlocutoria de prueba, se advierte que se requirió acreditar el punto 3 de dicha resolución, que consistía en la "Efectividad que el actor, a consecuencia de los referidos hechos, sufrió daño moral."

Que, conforme los pensamientos modernos del Derecho Probatorio, este daño debe ser probado.

De modo que el daño moral es un hecho que se somete a las mismas reglas probatorias que el daño material, sin embargo, dada su especial naturaleza, no es necesaria ni esperable una prueba directa. De esta forma la carga se levanta con algún elemento de convicción, aunque sea periférico, capaz de servir de inferencia para el establecimiento del daño moral.

A su respecto, en el expediente, dentro de la prueba documental no objetada, figura un Informe de daño a consecuencia de Prisión Política, Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes del actor, emitido por Alejandro Darío Valle Soto, Psicólogo, Programa PRAIS Magallanes que da cuenta de las secuelas psicológicas que la prisión y tortura le provocó al demandante. Este es un instrumento privado emanado por un tercero ajeno al juicio que, al no ser reconocido por quien lo suscribe, carece por sí solo de valor probatorio como instrumento.

No obstante, este informe psicológico unidos a otros antecedentes acompañados en el proceso, entre otros, la certificación de calidad de víctima elaborado por la Comisión Valech, y validadas por el INDH, que detallan la prisión y torturas sufridas por el demandante, forman una presunción judicial, con características de grave, precisa y concordante, que confirma procesalmente el daño moral sufrido y ocasionado por el Estado y que este tribunal estima debe ser resarcido.

DECIMO SEXTO: En definitiva, quedaron acreditados en el caso sub júdice los hechos dañinos en que se funda la demanda, constituido por el actuar delictual en que han incurrido agentes del Estado de Chile.

Los perjuicios de índole moral, que a consecuencia de ello ha



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

devenido en quien ha accionado civilmente, quedan -a su vez- suficientemente asentados en razón de la prueba documental acompañada y que da cuenta de la carga psicológica y estrés post traumático que mantiene hasta el día de hoy el demandante con motivo de la detención ilegal, prisión política y torturas sufridas durante entre el 4 de octubre 1973 al 6 febrero de 1974 y mayo de este último año y respectivo desplazamiento fuera del país.

Lo anterior, refrendado además por los hechos asentados en el motivo séptimo y lo señalado en el considerando octavo de esta sentencia.

Con todo, es dable afirmar que los hechos en que incurrieron los agentes del Estado implican lesión a derechos extra patrimoniales de gran valor, entre los cuales aparece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, derechos que se encuentran cautelados constitucionalmente.

DECIMO SEPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y la entidad del daño moral sufrido, como también sus consecuencias psíquicas, familiares y sociales en el actor, y -por cierto- su persistencia en el tiempo, que de acuerdo a lo expresado tanto por el demandante, como por la parte demandada, no es posible ceñirse a criterios concretos y específicos que vayan unidos a una determinada cantidad de dinero, y que esta cantidad, pueda efectivamente resarcir las consecuencias perniciosas del ilícito, es que corresponde acceder a la pretensión indemnizatoria de autos, fijándose prudencialmente su monto en la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos) para don José Bernardo Becerra Puentes.

En cuanto a la solicitud subsidiaria del Fisco de considerar para la regulación del daño, los pagos ya recibidos del estado, no puede ser atendida, por las mismas argumentaciones referidas en los considerandos décimos primero al décimo tercero de esta sentencia.

DECIMO OCTAVO: Que, la restante prueba anotada en el motivo quinto y sexto de esta sentencia, en lo no considerado, en nada altera lo que se ha venido razonando y sólo se menciona para los fines procesales pertinentes.

DECIMO NOVENO: Que, en relación a las costas, considerando que la parte demandada no ha sido totalmente vencida, así como la



naturaleza de la acción, y las acciones previas que ha desplegado el Estado para satisfacción de las víctimas, se eximirá del pago de las costas.

VIGESIMO: Para efectos de reajustes e intereses y concretar el principio de la integridad de la reparación del daño, las sumas que se condena pagar al demandado, por concepto de indemnización por daño moral, se reajustarán en la misma proporción en que varíe positivamente el Índice de Precios al Consumidor desde el mes anterior a la época en que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la época de la mora hasta el pago efectivo.

VIGESIMO PRIMERO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

Por estas consideraciones, y teniendo presente el derecho internacional de los derechos humanos; las Convenciones Internacionales sobre la materia, ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes; la Constitución Política de la Republica; nuestro Código Civil; Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.992; y demás normas pertinentes, SE DECLARA:

I. Que se rechazan las excepciones de pago íntegro y prescripción opuestas por el Fisco de Chile.

II. Que, se acoge la demanda deducida, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, José Bernardo Becerra Puentes, cédula nacional de identidad número N° 5.145.135-K, a título de indemnización por daño moral, **la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos)**, más los reajustes e intereses en los términos del considerando vigésimo del fallo.

III. Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-1371-2021.

DICTADA POR DON CESAR MILLANAO ANDAUR, JUEZ SUBROGANTE DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH

Certifico: que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Punta Arenas, 16 de mayo de 2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJNTXFVXSXH